

**Consejo de Seguridad**

Distr. general
14 de abril de 2004
Español
Original: inglés

Carta de fecha 11 de abril de 2004 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo

Me dirijo a usted en relación con mi carta de 16 de enero de 2004 (S/2004/60). El Comité contra el Terrorismo ha recibido el cuarto informe del Brasil, adjunto a la presente, presentado conforme a lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo). Le agradecería que dispusiera que la presente carta y su anexo se distribuyeran como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Inocencio F. **Arias**
Presidente

Comité del Consejo de Seguridad establecido
en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa
a la lucha contra el terrorismo

Anexo

**Carta de fecha 8 de abril de 2004 dirigida al Presidente
del Comité contra el Terrorismo por el Representante
Permanente del Brasil ante las Naciones Unidas**

En respuesta a su carta de fecha 9 de enero de 2004, tengo el honor de adjuntar a la presente el cuarto informe del Gobierno del Brasil al Comité contra el Terrorismo, conforme a lo dispuesto en el párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad (véase el documento adjunto).

(*Firmado*) Ronaldo Mota **Sardenberg**
Embajador
Representante Permanente del Brasil
ante las Naciones Unidas

Documento adjunto*

Ministerio de Relaciones Exteriores – República Federativa del Brasil

Cuarto Informe al Comité contra el Terrorismo, 2004

1. Medidas de aplicación

Protección eficaz del sistema financiero

1.1 La aplicación eficaz del apartado d) del párrafo 1 de la resolución requiere mecanismos adecuados para velar por que los fondos recaudados por las organizaciones que tienen o dicen tener objetivos caritativos, sociales o culturales no se desvíen a fines distintos de los declarados, en particular, para la financiación del terrorismo. El Comité, tras leer el tercer informe (págs. 5 y 6) y el informe complementario (pág. 8) ha observado que esta función recae en diferentes organismos brasileños (el Tribunal de Cuentas de la Unión, el Ministerio de Justicia, el Banco Central del Brasil, el Ministerio Público, etc.). El Comité agradecería que se le informara de cómo coordinan sus actividades esos organismos entre sí y con los órganos encargados de llevar adelante investigaciones penales en el Brasil. ¿Existen procedimientos para responder a las solicitudes de gobiernos extranjeros de que se investiguen determinadas organizaciones de las que se sospecha están vinculadas al terrorismo? ¿Ha iniciado acciones judiciales alguna vez el Brasil contra una organización sin fines de lucro por sospechar que participa en la financiación de actividades terroristas? De ser así, sírvanse indicar los procedimientos que se siguieron y el resultado de esas acciones.

Hay varios organismos brasileños encargados de velar por que los fondos recaudados por instituciones sin fines de lucro no se desvíen a propósitos ilícitos, en particular, a la financiación del terrorismo.

1.1.1 El Gobierno del Brasil coordina las actividades de esos organismos por conducto de la Estrategia Nacional contra el Blanqueo de Dinero (ENCLA) en lo relativo al año 2004 (véase el documento anexo). La ENCLA ha creado un nuevo sistema para luchar contra el blanqueo de dinero en el Brasil sobre la base de la celebración de consultas permanentes entre las organizaciones públicas en tres niveles: estratégico, de inteligencia y operacional. En el plano estratégico, la ENCLA creó la “Oficina de Gestión Integrada para Prevenir y Combatir el Blanqueo de Dinero” (GGI-LD), que se ocupa de definir la política y los objetivos públicos en esta esfera. Las actividades de la GGI-LD son coordinadas por el Departamento de Cooperación Judicial y Recuperación de Activos del Ministerio de Justicia.

En el ámbito de la inteligencia, la dependencia de inteligencia financiera del Brasil es el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), establecido en virtud de la Ley 9613/98.

Las actividades para prevenir y combatir el blanqueo de dinero se llevan a cabo dentro del campo de acción de las organizaciones competentes y son coordinadas, caso por caso, por grupos de tarea específicos.

* Los anexos se han depositado en poder de la Secretaría y están disponibles para su consulta por los interesados.

Oficina de Gestión Integrada para Prevenir y Combatir el Blanqueo de Dinero. Organizaciones participantes:

- Agência Brasileira de Inteligência do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (ABIN)/Agencia Brasileña de Inteligencia del Gabinete de Seguridad Institucional del Presidente de la República¹;
- Advocacia-Geral da União (AGU)/Fiscalía General de la República²;
- Banco Central do Brasil (BACEN)/Banco Central del Brasil³;
- Casa Civil da Presidência da República (Casa Civil)/Gabinete Civil de la Presidencia de la República⁴;
- Controladoria-Geral da União (CGU)/Contraloría General de la Unión⁵;
- Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda (COAF)/Consejo de Control de Actividades Financieras del Ministerio de Hacienda⁶;
- Conselho da Justiça Federal (CJF)/Consejo de Justicia Federal⁷;
- Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça (DPF)/Departamento de Policía Federal del Ministerio de Justicia⁸;
- Departamento de Polícia Rodoviária Federal do Ministério da Justiça (DPRF)/Departamento de Policía Vial Federal del Ministerio de Justicia⁹;
- Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça (DRCI)/Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia¹⁰;
- Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI)/Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República¹¹;
- Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)/Instituto Nacional de Seguridad Social¹²;
- Ministério Público Federal (MPF)/Ministerio Público Federal¹³;
- Ministério das Relações Exteriores (MRE)/Ministerio de Relaciones Exteriores¹⁴;

¹ Véase <http://www.abin.gov.br/abin>.

² Véase <http://www.agu.gov.br/agu.htm>.

³ Véase <http://www.bcb.gov.br>.

⁴ Véase <http://www.presidencia.gov.br/casacivil/site/static>.

⁵ Véase <http://www.presidencia.gov.br/cgu>.

⁶ Véase <http://www.fazenda.gov.br/coaf>.

⁷ Véase <http://www.cjf.gov.br>.

⁸ Véase <http://www.dpf.gov.br>.

⁹ Véase <http://www.dprf.gov.br>.

¹⁰ Véase <http://www.mj.gov.br>.

¹¹ Véase <http://www.planalto.gov.br/gsi>.

¹² Véase <http://www.inss.gov.br>.

¹³ Véase <http://www.pgr.mpf.gov.br/pgr/index.jsp>.

¹⁴ Véase <http://www.mre.gov.br>.

- Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda (PGFN)/Procuraduría General de la Hacienda Nacional del Ministerio de Hacienda¹⁵;
- Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE)/Secretaría de Derecho Económico del Ministerio de Justicia¹⁶;
- Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social (SPC)/Secretaría de Previsión Complementaria del Ministerio de Previsión¹⁷;
- Secretaria Nacional Antidrogas do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (SENAD)/Secretaría Nacional contra las Drogas del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República¹⁸;
- Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça (SNJ)/Secretaría Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia¹⁹;
- Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (SENASP)/Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia²⁰;
- Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda (SRF)/Secretaría de Impuestos Federales del Ministerio de Hacienda²¹;
- Tribunal de Contas da União (TCU)/Tribunal de Cuentas de la Unión²².

Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional

El Ministerio de Justicia creó un Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional que, conforme al decreto 4991, de 18 de febrero de 2004, tiene las siguientes atribuciones y mandatos:

Artículo 13. Es competencia del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional:

- I. Formular, integrar y proponer políticas al Gobierno en los aspectos relacionados con la lucha contra el blanqueo de dinero, la delincuencia organizada transnacional, la recuperación de activos y la cooperación jurídica internacional;
- II. Promover la coordinación de los órganos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, incluidos los ministerios públicos federal y estatales en la lucha contra el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada transnacional;
- III. Negociar acuerdos y coordinar las actividades de cooperación jurídica internacional;
- IV. Actuar como autoridad central para dar curso a las solicitudes de cooperación jurídica mutua;

¹⁵ Véase <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

¹⁶ Véase <http://www.mj.gov.br/sde>.

¹⁷ Véase <http://www.inss.gov.br/08.asp>.

¹⁸ Véase <http://www.senad.gov.br>.

¹⁹ Véase <http://www.mj.gov.br/snj>.

²⁰ Véase <http://www.mj.gov.br/senasp>.

²¹ Véase <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

²² Véase <http://www.tcu.gov.br>.

V. Coordinar las medidas del Estado brasileño en los foros internacionales en lo relativo a la prevención y lucha contra el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada transnacional, la recuperación de activos y la cooperación jurídica internacional;

VI. Dar curso, comentar y coordinar la ejecución de la cooperación jurídica internacional activa y pasiva, incluidos los exhortos;

VII. Informar de la recuperación de activos y la cooperación jurídica, la prevención y lucha contra el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada internacional.

Consejo de Control de Actividades Financieras

El COAF ha recibido, incluso de fuentes internacionales, listas con los nombres de las personas y entidades que participan o de las que se sospecha que participan en actividades terroristas. El COAF ha incluido esos nombres en su base de datos y ha dado a conocer las listas a organismos gubernamentales tales como el Departamento de Policía Federal, la Secretaría de Impuestos Federales, la Agencia Brasileña de Inteligencia, el Banco Central del Brasil, la Comisión de Valores (CVM)²³ y la Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP)²⁴ para que tomen las medidas del caso.

Además, el COAF verifica todos los nombres de sospechosos que figuran en la base de datos del CPF y el CNPJ para determinar si la persona natural o entidad legal pertinente ha desarrollado actividades legalmente en el Brasil²⁵. A continuación, si se encuentran indicios decisivos, el COAF envía de inmediato la información pertinente al DRCI.

Banco Central del Brasil

El Banco Central del Brasil da a conocer las listas a todas las instituciones financieras para determinar si la persona natural o jurídica incluida en ellas ha desarrollado actividades en el sistema financiero o tiene cuentas o cualesquiera otros tipos de activos.

²³ Véase <http://www.cvm.gov.br>.

²⁴ Véase <http://www.susep.gov.br>.

²⁵ En el sistema jurídico brasileño, toda persona natural o jurídica debe tener un número de identificación de contribuyente (CPF/CNPJ) para llevar a cabo operaciones comerciales o financieras. La inscripción en el Registro de Contribuyentes es obligatoria para las personas naturales o jurídicas residentes en el Brasil o fuera del Brasil propietarias de bienes o derechos en el Brasil sujetas a registro público, incluidos bienes raíces, vehículos, naves, aviones, acciones, cuentas de banco, inversiones en el mercado financiero e inversiones en el mercado de capitales. Todos los años la Secretaría de Impuestos Federales exige que vuelva a registrarse toda persona que tenga un número de identidad y no haya presentado información impositiva anual, a fin de prevenir delitos tales como los fraudes. De esta forma, las autoridades de inteligencia pueden seguir la pista de todo movimiento financiero recurriendo a la base de datos del CPF y el CNPJ, que proporciona la información solicitada a partir del número de identidad de la persona natural o jurídica que se está investigando. Sólo tienen acceso a la base de datos las autoridades competentes. La reglamentación permite que la FIU y las autoridades competentes identifiquen y sigan la pista de los bienes que están sujetos o pueden estar sujetos a confiscación o de los que se sospeche que proceden de actividades delictivas o se utilizan para financiar el terrorismo.

La función del Banco Central a este respecto es supervisar las transacciones de cambio y las operaciones con divisas relacionadas con depósitos bancarios de no residentes en bancos brasileños. Entre otros varios tipos de transacciones, se analizan las donaciones y otras transferencias de activos de las organizaciones sin fines de lucro y las entidades no gubernamentales. Las donaciones procedentes o destinadas al extranjero son también objeto de reglamentos específicos (Comunicado oficial 9068 del Banco Central, de 4 de diciembre de 2001).

Además, el Banco Central del Brasil, a solicitud de gobiernos y organismos extranjeros ha llevado a cabo investigaciones en el mercado financiero, sobre todo en el sector de la banca, sobre la existencia de activos a nombre de supuestos terroristas u organizaciones terroristas.

1.1.2 Hay dos formas de responder a las solicitudes recibidas de otros Estados en materia penal. Una de ellas es recurrir a las disposiciones de los tratados multilaterales o bilaterales sobre cooperación jurídica; la otra se basa en la existencia de garantías de reciprocidad. Estos procedimientos son aplicables a todo tipo de delito, incluidos los relacionados con el terrorismo.

En el capítulo IV del decreto 2799/98 se establecen las obligaciones y atribuciones del COAF en cuanto al intercambio de información y los acuerdos de cooperación. La información puede compartirse con las autoridades competentes de otros países y con las organizaciones internacionales sobre la base de la reciprocidad o de la existencia de acuerdos. En los artículos 12 y 13 del decreto 2799/98 se establece lo siguiente:

Artículo 12. El COAF podrá compartir información con las autoridades pertinentes de otros países y con las organizaciones internacionales sobre la base de la reciprocidad o de la existencia de acuerdos.

Artículo 13. Cuando el COAF reciba solicitudes de autoridades o entidades competentes del extranjero de que se les envíe información sobre delitos definidos en el artículo 1 de la Ley 9613/98, responderá a ellas o las reexpedirá, según proceda, a los organismos competentes, a fin de que se tomen las medidas necesarias para responder a ellas.

Como miembro del Grupo Egmont, el COAF puede intercambiar información con otras unidades de inteligencia financiera. Toda solicitud de información procedente del extranjero recibe respuesta directa del COAF, en los formularios apropiados, y entraña la transferencia de la responsabilidad de preservar la confidencialidad de la información. El COAF también puede reexpedir las solicitudes de información a otros organismos del Brasil para que se tomen las medidas necesarias (artículo 11, párrafo 4, y artículo 13 del decreto 2799/98).

El COAF ha firmado memorandos de entendimiento con sus contrapartes de la Argentina, Bélgica, Bolivia, Colombia, Corea del Sur, España, Francia, Guatemala, Panamá, el Paraguay, Portugal, Rusia y Tailandia; además, está negociando la firma de memorandos análogos con sus contrapartes de varios otros Estados.

1.1.3 No ha habido confirmación alguna de que haya organizaciones sin fines de lucro que desarrollen actividades en territorio brasileño y participen en la financiación de organizaciones terroristas. Por lo tanto, no hay procesos judiciales aplicables. Con arreglo a los marcos de cooperación existentes, el Gobierno del Brasil está dispuesto a investigar las solicitudes que envíen gobiernos extranjeros sobre las denuncias que

se formulen a ese respecto, siempre que se proporcionen las pruebas de corroboración pertinentes.

1.1.4 Respecto de la última parte de la pregunta, el Gobierno del Brasil, por conducto de la Agencia Brasileña de Inteligencia, intercambia información sobre terrorismo con los organismos equivalentes de varios países y prepara informes específicos y estratégicos sobre las organizaciones vinculadas al terrorismo. Hasta ahora, no se han confirmado las sospechas relativas a la participación de organizaciones de ese tipo en la financiación del terrorismo en el Brasil. Sin embargo, las autoridades brasileñas investigan todas las actividades de esas organizaciones que causan sospechas y se ponen en su conocimiento.

1.2 Con respecto a la represión de la financiación del terrorismo, prevista en el apartado a) del párrafo 1 de la resolución, el Comité contra el Terrorismo desearía saber si el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) cuenta con suficientes recursos (humanos, financieros y técnicos) para cumplir su mandato. Sírvasse respaldar su respuesta con datos apropiados.

El Consejo de Control de Actividades Financieras es la dependencia de inteligencia financiera del Brasil y fue creado en virtud de la Ley 9613/98, bajo la jurisdicción del Ministerio de Hacienda, para que se ocupara de recibir la información pertinente, examinarla y detectar todo hecho que pudiera entrañar la ocurrencia de las actividades ilícitas previstas en esa Ley. El Estatuto del COAF y sus procedimientos de trabajo internos se aprobaron mediante el decreto 2799, de 19 de diciembre de 1998 y la norma administrativa 330, de 18 de diciembre de 1998, respectivamente.

La Ley brasileña relativa al blanqueo de dinero fue modificada por la Ley 10701, de 9 de julio de 2003, para que incluyera la financiación del terrorismo como delito determinante del blanqueo de dinero. Por tanto, los sectores económicos sujetos a las disposiciones de la Ley relativa al blanqueo de dinero están obligados a examinar detalladamente las transacciones y comunicar aquellas que se sospeche que guarden relación con la financiación del terrorismo.

El COAF, un modelo administrativo de dependencia de inteligencia financiera, es miembro del Grupo Egmont desde 1999. Su estructura abarca un Plenario y una Secretaría Ejecutiva.

El COAF es un órgano colegiado de adopción de decisiones cuya jurisdicción abarca la totalidad del territorio del Brasil. Forma parte de la estructura del Ministerio de Hacienda. Su sede se encuentra en el Distrito Federal. El Plenario del COAF está integrado por un Presidente nombrado por el Presidente de la República de acuerdo con la indicación del Ministro de Hacienda, y 10 miembros del Consejo escogidos entre los funcionarios activos del Banco Central del Brasil, la Comisión de Bolsa y Valores, la Superintendencia de Compañías de Seguro Privadas, la Procuraduría General de la Hacienda Nacional, la Secretaría de Impuestos Federal, la Agencia Brasileña de Inteligencia, el Departamento de Policía Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y la Contraloría General.

La estructura del Plenario del COAF ofrece un amplio margen para la interacción y la cooperación entre los órganos que se ocupan de los diferentes aspectos de la lucha contra el blanqueo de dinero. Las autoridades del Brasil consideran que los medios jurídicos y los recursos de que dispone son adecuados. Desde su creación, el COAF ha formulado varias iniciativas encaminadas a capacitar a su propio personal

técnico mediante cursos concretos sobre actividades internas de lucha contra el blanqueo de dinero.

El Consejo cuenta con el apoyo de una Secretaría Ejecutiva dirigida por un Secretario Ejecutivo cuyo nombramiento está a cargo del Ministro de Hacienda.

El COAF mantiene subdivisiones locales situadas en las dependencias regionales de las oficinas a las que pertenecen los miembros del Consejo, a fin de prestar una atención adecuada a todo el territorio del país.

Los gastos de la instalación y el funcionamiento del COAF y de su Secretaría Ejecutiva están previstos en el presupuesto del Ministerio de Hacienda (artículo 24 del decreto 2799/98).

El COAF puede dirigirse directamente a las instituciones financieras para solicitar información o dictarles instrucciones, pero, en la práctica, con respecto a las entidades reglamentadas²⁶, todas las solicitudes de información se formulan por conducto del órgano de supervisión.

Además, en la Ley 10701/03 se añadió el siguiente texto al artículo 5 de la Ley 9613/98:

Párrafo 3. El COAF podrá solicitar a cualquier otro órgano gubernamental la información bancaria o financiera que obre en sus registros acerca de personas relacionadas con actividades sospechosas.

La capacidad del COAF para detectar y vigilar estas actividades aumentará gracias a la creación del Registro Nacional de Cuentas Bancarias, cuya administración está a cargo del Banco Central del Brasil (Ley 10701/03).

²⁶ El COAF tiene acceso a las siguientes bases de datos gubernamentales: 1) Registro Nacional de Entidades Jurídicas (acceso en línea); 2) Registro Nacional de Personas Naturales (acceso en línea); 3) Declaración de Operaciones relativas a Bienes Raíces (acceso en línea); 4) Sistema de Información del Banco Central (acceso en línea); 5) Registro de Proveedores de Servicios para el Turismo (acceso en línea); 6) Registro de Proyectos Gubernamentales sobre Turismo (acceso en línea); 7) Registro de Aeronaves (acceso por lotes de archivos); 8) Registro Nacional de Barcos (acceso por lotes de archivos); 9) Sistema de Información del Registro Nacional de Vehículos Automotores (acceso en línea); 10) Registro Nacional de Licencias de Conducción (acceso en línea); 11) Sistema Nacional de Registro Rural (acceso en línea); 12) Servicio ICONE de la Presidencia de la República (acceso en línea); 13) Sistema Integrado de Administración de Funcionarios Públicos (acceso en línea); 14) Sistema de Análisis de la Información sobre Comercio Exterior (acceso en línea); 15) Base de datos sobre empleados públicos sancionados (acceso por Microsoft Excel); el COAF está negociando el acceso a las siguientes bases de datos: 1) Base de datos de la Procuraduría General de la Hacienda Nacional; 2) Registro de establecimientos comerciales; 3) Registro nacional de electores – información personal; 4) Base de datos de las asociaciones comerciales de los estados federativos del Brasil; 5) Base de datos del Consejo Nacional de Fiscalías; 6) Registro nacional de información sobre seguridad social; 7) Sistema nacional de registro de extranjeros; 8) Sistema nacional de pasaportes; 9) Sistema nacional de personas requeridas por la ley y personas a quienes se prohíbe viajar; 10) Sistema de seguimiento de procesos judiciales; 11) Sistema nacional de información penal; 12) Sistema nacional de procedimientos; 13) Sistema nacional de tráfico internacional; 14) Sistema nacional de fiscalización de productos químicos; 15) Sistema nacional de datos estadísticos del uso indebido y el tráfico ilícito de drogas; 16) Sistema de información para la tributación; 17) Registro y seguimiento de las operaciones realizadas por mediadores ante la Aduana; 18) Información sobre comercio exterior; 19) Declaración de los impuestos sobre la renta de las personas naturales y las entidades jurídicas; 20) Base de datos sobre expedientes de los contribuyentes.

El COAF ha venido ocupándose de tres bases fundamentales. i) el desarrollo tecnológico, ii) la capacitación del personal y iii) el mejoramiento del intercambio de información. La Secretaría Ejecutiva ha mejorado su capacidad tecnológica recurriendo a la cooperación internacional para la adquisición de nueva tecnología. La estructura institucional del COAF facilita la cooperación entre las autoridades en el intercambio de información sobre el blanqueo de dinero. En general, los recursos del COAF son compatibles con los recursos de que disponen otros órganos de la administración pública.

Desde su creación, el COAF ha elaborado numerosas iniciativas para capacitar a su propio personal técnico. Desde 2001, ha venido apoyando cursos concretos relacionados con las modalidades de la lucha contra la financiación del terrorismo, y ha promovido programas especiales de capacitación sobre esas cuestiones dirigidos a las fuerzas del orden y la autoridades judiciales.

El COAF sigue elaborando disposiciones en materia de comunicación con las fuerzas del orden y las autoridades judiciales. De conformidad con disposiciones jurídicas, el COAF estableció acuerdos con 118 autoridades judiciales y de la fiscalía, la policía y otros organismos gubernamentales del Brasil con objeto de intercambiar información sobre casos relacionados con el blanqueo de dinero.

A este efecto, en 2002 el COAF puso en funcionamiento el Sistema de Solicitud de Información (SISPED), que permite que cualquier autoridad del país acceda a toda la información con que cuenta el Sistema, incluida la de carácter secreto. Toda autoridad puede obtener acceso a esa información mediante la presentación de un formulario de registro en el que debe incluir datos concretos que son analizados por el COAF, tras lo cual éste otorga una contraseña que permite efectuar la investigación. El SISPED facilita un acceso más rápido y seguro y, al propio tiempo, salvaguarda la base de datos del COAF.

1.3 Con respecto a la aplicación de los apartados a) y d) del párrafo 1, ¿podría el Brasil proporcionar al Comité contra el Terrorismo estadísticas sobre el número de casos en que se impusieron sanciones a instituciones financieras y no financieras por haber prestado apoyo a terroristas u organizaciones terroristas? ¿Realizan las autoridades del Brasil auditorías a las instituciones financieras para comprobar si cumplen los requisitos de denuncias de las transacciones sospechosas? ¿Se realizan corrientemente auditorías de las casas de cambio y las agencias de remesa de fondos? ¿Con qué frecuencia se realizan auditorías de este tipo en las instituciones financieras?

El Banco Central del Brasil verifica el cumplimiento por las instituciones financieras de los requisitos de la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo mediante un programa constante de controles internos y evaluación del cumplimiento (ACIC). Estas evaluaciones se aplican a las instituciones financieras de conformidad con la reglamentación del Banco Central y abarcan varios aspectos, tales como la política institucional, el marco de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, los procedimientos e instrumentos pertinentes, los requisitos de “conocer al cliente” y “conocer al empleado”, y los papeles que desempeñan las políticas de capacitación y las auditorías internas y externas.

En relación con el marco de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, el Banco Central del Brasil evalúa los siguientes aspectos: la calidad de los sistemas y los procedimientos para detectar, seleccionar, analizar y

denunciar las transacciones sospechosas y para gestionar este proceso; la existencia de procedimientos sistemáticos concretos para productos de alto riesgo, tales como las operaciones bancarias privadas, las operaciones bancarias por Internet, y las operaciones con bancos corresponsales y con filiales situadas en lugares vulnerables; y la calidad de la información que se brinda al COAF.

El Banco Central del Brasil, teniendo presente el tamaño de las instituciones financieras y su participación en el mercado financiero, estableció como objetivos principales de este programa a los bancos, los corredores de operaciones con divisas y las cooperativas de crédito, y en el caso de las agencias de viajes y los hoteles, que realizan actividades cambiarias, estableció una inspección basada en la vigilancia *ex situ* de las transacciones realizadas por estas entidades y en inspecciones esporádicas *in situ*.

Hasta ahora el Banco Central del Brasil ha realizado 107 exámenes de instituciones financieras *in situ* y ha emitido seis cartas de compromiso (advertencias) relacionadas con el incumplimiento de las disposiciones de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. No se ha establecido una frecuencia específica para estas evaluaciones, que dependen del tipo y el tamaño de la institución financiera.

1.4 La aplicación eficaz del apartado a) del párrafo 1 de la resolución, así como del artículo 18 del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, requiere disposiciones jurídicas que obliguen a los intermediarios financieros (tales como abogados, contadores, notarios y otros profesionales que participen en transacciones financieras) a identificar a sus clientes y a comunicar a las autoridades competentes toda transacción sospechosa. En el tercer informe del Brasil (pág. 7) se menciona un proceso de consulta realizado a este efecto por el Consejo de Control de Actividades Financieras. El Comité contra el Terrorismo agradecería que se le proporcionara información sobre la marcha de ese proceso y un esbozo de las medidas que el Brasil se propone tomar en el futuro para lograr el pleno cumplimiento de este aspecto de la resolución.

El proceso de ratificación de la Convención Internacional para la represión de la financiación del terrorismo se encuentra en marcha en el Congreso Nacional y guarda relación con el objetivo 20 de la Estrategia Nacional contra el Blanqueo de Dinero (ENCLA), bajo la responsabilidad de la Oficina de Gestión Integrada para Prevenir y Combatir el Blanqueo de Dinero (GGI-LD), a saber:

Objetivo 20. Evaluar los proyectos de legislación y sugerir la introducción de cambios con objeto de: i) ampliar los tipos de delitos de blanqueo de dinero a fin de evitar la lista exhaustiva de delitos de antecedente; ii) introducir medidas administrativas de congelación de los activos ilícitos, iii) definir la organización criminal; iv) tipificar los delitos de terrorismo y financiación del terrorismo; v) modificar la Ley 9613/98. El grupo de trabajo (integrado por representantes de la Fiscalía General de la República (AGU), el COAF, el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI), el Consejo de Justicia Federal (CJF), el Ministerio Público Federal (MPF), la Contraloría General de la Unión (CGU) y la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN)) se ocupará del seguimiento de los proyectos en el Congreso Nacional, con miras a su aprobación, hasta octubre de 2004. También se ocupará del seguimiento del examen de los acuerdos internacionales suscritos

por el Brasil que se relacionen con políticas de lucha contra el blanqueo de dinero, hasta su aprobación.

En el artículo 9 de la Ley 9613/98 se estipula que quienes intervengan en operaciones financieras están obligados a identificar a sus clientes y a comunicar toda operación sospechosa al COAF:

Artículo 9. Las obligaciones enunciadas en los artículos 10 y 11 de la presente ley se aplicarán a toda entidad jurídica que realice con carácter permanente o temporal, como actividad principal o secundaria, y conjuntamente o por separado, cualquiera de las siguientes actividades:

- I. Recepción, corretaje e inversión de fondos de terceras partes en moneda brasileña o extranjera;
- II. Compra y venta de moneda extranjera u oro en calidad de activo financiero;
- III. Custodia, emisión, distribución, autorización, negociación, corretaje o administración de valores;

Párrafo único. Se aplicarán las mismas obligaciones a los siguientes elementos:

- I. Acciones, productos básicos e intercambios de futuros financieros;
- II. Compañías de seguro, corredores de seguro e instituciones relacionadas con planes de pensión o programas de seguridad social privados;
- III. Administradores de tarjetas de pago o de crédito y *consorcios* [fondos de consumidores usualmente recibidos y administrados para la adquisición de bienes de consumo]²⁷ ;
- IV. Administradores o compañías que utilizan tarjetas o cualesquiera otros medios electrónicos, magnéticos o de índole similar con los que se pueden efectuar transferencias de fondos;
- V. Compañías que se dedican a actividades de arrendamiento y factoraje;
- VI. Compañías que distribuyen propiedades de cualquier tipo (incluidos dinero en efectivo, bienes raíces y artículos) o servicios, o que ofrecen descuentos por la adquisición de tales propiedades o servicios mediante loterías o métodos similares;
- VII. Filiales o representantes de entidades extranjeras que realicen en el Brasil cualquiera de las actividades mencionadas en el presente artículo, incluso de manera ocasional;
- VIII. Cualesquiera otras entidades jurídicas dedicadas a actividades que requieran la autorización de los organismos encargados de regular los mercados de valores, intercambio, finanzas y seguros;
- IX. Sin excepción alguna, todo particular o entidad del Brasil o del exterior que funcione en el Brasil en calidad de agente, representante o apoderado de un gerente y agente comisionista, o que de cualquier otra forma represente los intereses de entidades jurídicas extranjeras dedicadas a cualquiera de las actividades a que se hace referencia en el presente artículo;

²⁷ Nota del traductor.

X. Entidades jurídicas dedicadas a actividades concernientes a bienes raíces, incluida la promoción, adquisición y venta de propiedades;

XI. Particulares o entidades jurídicas que intervengan en el comercio de joyas, piedras y metales preciosos, obras de arte y antigüedades;

XII. Particulares o entidades jurídicas que comercien en artículos suntuarios o de alto valor o se dediquen a cualquier actividad que entrañe elevadas sumas de dinero al contado.

1.5 La aplicación eficaz del apartado a) del párrafo 1 de la resolución requiere que las instituciones financieras y otros intermediarios identifiquen a sus clientes y comuniquen las transacciones financieras sospechosas a las autoridades competentes. En este sentido, el Comité contra el Terrorismo agradecería que el Brasil le indicara el número de denuncias de transacciones sospechosas que han recibido el COAF y otras autoridades competentes, destacando en particular las ocurridas en:

- El sector del seguro;
- Los servicios de remesas y transferencias monetarias;
- Las oficinas de cambio.

Sírvase indicar también el número de denuncias de transacciones sospechosas que se han analizado y divulgado, y el número de denuncias de ese tipo que han dado lugar a investigación, procesamiento o sanción.

Para el período comprendido entre 1999 y 2003 (hasta el mes de septiembre), las estadísticas son las siguientes:

Denuncias de transacciones sospechosas

Plazo considerado para 2004: 29 de febrero

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Total
Instituciones no financieras							
Salas de bingo	35	1 412	960	55	19	5	2 486
Mercados de productos	1	1	0	0	0	0	2
Tarjetas de crédito y débito	0	3	42	58	96	1	200
Bienes raíces, incluidas la promoción, compra y venta (de propiedades de esta índole)	206	769	610	741	635	77	3 038
Factoraje	32	20	37	1	1	0	91
Comerciantes de joyas y de piedras y metales preciosos	6	7	1	1	0	1	16
Loterías	0	133	167	97	152	13	562
Comerciantes de objetos de arte y antigüedades	0	0	0	0	1	0	1
Subtotal COAF	280	2 345	1 817	953	905	97	6 397

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Total
Instituciones financieras							
Instituciones financieras bancarias y no bancarias (Banco Central del Brasil)	544	4 308	4 521	4 697	5 212	1 137	20 419
Transacciones en efectivo (Banco Central del Brasil) ²⁸	0	0	0	0	32 608	10 610	43 218
Compañías de seguro (SUSEP)	0	0	7	361	876	208	1 452
Bolsa de valores (CVM)	0	0	10	9	13	1	33
Fondos de pensiones (SPC)	0	1	9	0	2	3	15
Subtotal	544	4 309	4 547	5 067	38 711	11 959	65 137
Total	824	6 654	6 364	6 020	39 616	12 056	71 534

Para el período comprendido entre 1999 y 2003 (hasta el mes de septiembre), las estadísticas son las siguientes:

- Denuncias de transacciones sospechosas recibidas y evaluadas por el COAF: 24.557;
- Denuncias de transacciones sospechosas presentadas a las autoridades competentes: 128;
- Solicitud de asistencia de autoridades extranjeras recibidas por el COAF: 255;
- Respuestas proporcionadas a las solicitudes de autoridades extranjeras: 255.

Con la creación de la GGI-LD y el establecimiento de la ENCLA y de su objetivo 17, que es responsabilidad del Consejo de Justicia Federal (CFJ) y deberá alcanzarse el 31 de octubre de 2004, el Brasil estará en condiciones de proporcionar dos datos necesarios:

Objetivo 17. Publicar, en coordinación con el Ministerio Público Federal (MPF), el Departamento de Policía Federal (DPF), el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI) y los tribunales estatales de justicia, estadísticas mensuales sobre el número de investigaciones, procedimientos penales, sentencias y absoluciones, y sobre el número de decisiones judiciales, relacionadas con el delito de blanqueo de dinero, a nivel federal y estatal. Esta información deberá presentarse desglosada por zonas geográficas.

1.6 En el contexto de la aplicación eficaz del apartado a) del párrafo 1 de la resolución, sírvase explicar las reglas aplicables para la identificación de personas o entidades que mantienen cuentas bancarias, o a cuyo nombre se mantiene una cuenta bancaria (es decir, los beneficiarios), o que son beneficiarios de transacciones realizadas por intermediarios profesionales, así como de cualquier otra persona o entidad relacionada con una transacción financiera. Sírvase

²⁸ En el Brasil, las compañías de remesas monetarias y los servicios de transferencias en efectivo sólo pueden funcionar por conducto de una institución financiera y necesitan la autorización del Banco Central del Brasil. En estos casos se aplican las mismas reglas indicadas para todos los sectores.

describir los procedimientos en virtud de los cuales los órganos extranjeros encargados de hacer cumplir la ley u otras entidades de lucha contra el terrorismo pueden obtener esa información en los casos en que se sospecha de vínculos con terroristas.

De conformidad con la Ley 8021, de 12 de abril de 1990, todo propietario o beneficiario de acciones, valores o cualquier otro tipo de depósito o inversión de carácter financiero debe ser debidamente identificado.

En el artículo 64 de la Ley 8383, de 30 de diciembre de 1991, se establece que los gerentes de cuentas y demás empleados de instituciones financieras cometen un delito si permiten que personas naturales o entidades jurídicas inexistentes, o clientes con nombres ficticios, abran cuentas o efectúen transferencias de fondos.

De conformidad con el artículo 10 de la Ley 9613, de 3 de marzo de 1998, las instituciones financieras indicadas en el artículo 9 de esa Ley deben identificar a sus clientes y mantener registros actualizados en cumplimiento de las disposiciones de las autoridades competentes sobre requisitos para la identificación de los clientes y el mantenimiento de registros.

A este respecto, el Banco Central del Brasil ha establecido varios procedimientos que deben adoptar las instituciones financieras en virtud de su reglamento. Antes de que se promulgara la Ley 9613, el Banco Central del Brasil emitió la norma administrativa (*Resolução*) 2025, de 24 de noviembre de 1993, enmendada por la norma administrativa (*Resolução*) 2747, de 28 de junio de 2000, en la que se establecieron requisitos mínimos de identificación para la apertura de cuentas de depósito. Entre esos requisitos figuran datos como el nombre, la dirección, la ocupación, la nacionalidad y la tarjeta de identidad del cliente; en el caso de las personas naturales, su número de registro (CPF: número en el registro de contribuyentes al impuesto sobre la renta); y en el caso de las entidades jurídicas, su denominación jurídica, actividad principal, dirección y número en el registro nacional de entidades jurídicas (CNPJ). Los requisitos de identificación del cliente incluyen, en el caso de las entidades jurídicas, a los particulares que están legalmente autorizados para representarlas y a sus propietarios.

En su norma administrativa (*Circular*) 3006, de 5 de septiembre de 2000, el Banco Central del Brasil estableció que, durante el proceso de apertura de una cuenta, las instituciones financieras deben comprobar la situación de los titulares de cuentas o de sus representantes en el registro de personas naturales.

De conformidad con la norma administrativa (*Circular*) 2852 del Banco Central del Brasil, de 3 de diciembre de 1998, las instituciones financieras y de otra índole que hayan sido autorizadas por el Banco para realizar operaciones deberán mantener registros actualizados de sus respectivos clientes así como controles y registros internos consolidados para posibilitar no sólo la verificación de la identificación exacta del cliente, sino además la compatibilidad entre las transferencias de fondos, la actividad económica y la situación financiera de cada uno de ellos.

En otras normas del Banco Central del Brasil se han establecido procedimientos de identificación para el pago y el recibo de transacciones en efectivo (norma administrativa (*Resolução*) 1946, de 29 de julio de 1992), los clientes no residentes (norma administrativa (*Circular*) 2677, de 10 de abril de 1996), la apertura y transacción de cuentas de depósito por medios electrónicos, incluso a través de la Internet (norma administrativa (*Resolução*) 2817, de 22 de febrero de 2001), las transac-

ciones mediante cheques y otros instrumentos de transferencia de fondos (norma administrativa (*Circular*) 3030, de 12 de abril de 2001) y las transacciones en divisas (Consolidación de las normas relativas a divisas, conocida comúnmente como CNC).

La identificación tiene lugar en el momento en que se establece una relación comercial, y se exige la presentación de documentos originales adecuados y de una confirmación por escrito de un funcionario autorizado del Banco. También es necesaria la identificación cuando se sospecha que una transacción está relacionada con blanqueo de dinero, o cuando hay razones para sospechar que el cliente, o el posible cliente, trata de evadir los procedimientos de identificación.

Los clientes no residentes han de cumplir requisitos de identificación similares a los de los clientes nacionales, y en su caso las instituciones financieras exigen que las copias de los documentos de identificación presentados sean certificados por un notario público o por un funcionario de la Embajada del Brasil en el país de que se trate.

De conformidad con la Ley 9613/98, los registros deben mantenerse de manera tal que las instituciones financieras puedan reproducir los registros, la información o los documentos con facilidad y rapidez y en un formato utilizable. Mediante su programa de exámenes in situ, el Banco Central del Brasil accede a los controles internos de las instituciones financieras y comprueba su cumplimiento de los requisitos de identificación y debida diligencia.

El sistema financiero del Brasil no permite las cuentas numeradas.

Con arreglo a la ley del Brasil, para que las pruebas presentadas en un proceso judicial sean válidas deben obtenerse previa autorización jurídica. Esa autorización puede ser otorgada por el Brasil en respuesta a una solicitud de cooperación jurídica mutua que formule un Estado extranjero (sobre la base de un tratado o de garantías de reciprocidad).

1.7 En relación con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, ¿podría proporcionar el Brasil una descripción general de cualquier estrategia especial que haya elaborado a fin de que los organismos de investigación puedan impedir eficazmente la transferencia de recursos a terroristas (impedir, por ejemplo, la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones, así como la manipulación de activos de gran valor como oro, diamantes, etc.?)

De conformidad con las normas y procedimientos establecidos por el Banco Central, todas las transacciones de divisas en el Brasil se deben comunicar al Sistema de Información del Banco Central (SISBACEN), así como todos los depósitos efectuados por ciudadanos no residentes en bancos brasileños por un valor mínimo de 10.000 reales. Diariamente, el Sistema de Información del Banco Central registra aproximadamente 300 transferencias internacionales en moneda nacional (reales) y 15.000 operaciones cambiarias.

El Banco Central del Brasil utiliza esta base de datos para analizar los procesos operacionales utilizados en el mercado de divisas, sus instrumentos y mecanismos, así como operaciones concretas, con objeto de prevenir o detectar transacciones ilegales o situaciones relacionadas con el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo.

Para supervisar esas comunicaciones diarias, el Banco Central del Brasil utiliza un sistema informatizado que selecciona operaciones para su análisis ulterior en función de parámetros predefinidos. Entre otros criterios, la selección depende de la clasificación de la operación e incluye las transacciones atípicas, los clientes nuevos o sin historial, las transferencias cuya cuantía no se ajuste a la situación financiera del cliente, las transferencias financieras con el extranjero para adquirir bienes inmuebles, las transacciones de oro, las transacciones en efectivo, los pagos anticipados en concepto de importación y exportación efectuados por empresas sin historial o cuya evaluación financiera no se ajuste a los importes comerciados, las transacciones con entidades establecidas en paraísos fiscales y las donaciones. Además, el Banco Central del Brasil sigue la pista de los fondos pertenecientes a personas y entidades que se le haya pedido investigar (en particular, las vinculadas con organizaciones terroristas y la financiación del terrorismo según las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas).

Asimismo, el Ministerio de Finanzas promulgó el Reglamento Administrativo 350, de 16 de octubre de 2002, en virtud del cual la Oficina Federal de Hacienda y el Banco Central del Brasil establecieron, en el marco de sus jurisdicciones respectivas, procedimientos especiales de fiscalización e investigación a fin de reprimir el fraude en las transacciones de divisas.

1.8 En el tercer informe del Brasil (pág. 6), el Comité contra el Terrorismo observa que las disposiciones jurídicas en vigor autorizan la congelación e incautación de bienes adquiridos con el producto del delito. El Brasil también hace referencia a la Ley 9613/98, según la cual el terrorismo es un delito determinante del blanqueo de dinero y se autoriza la congelación e incautación de fondos relacionados con el terrorismo. En este sentido, el Comité contra el Terrorismo observa que, a efectos de la aplicación eficaz del apartado c) del párrafo 1 de la resolución, las disposiciones jurídicas en vigor han de prever la congelación de fondos, cualquiera que sea su origen, cuando:

- **Se sospeche que están vinculados con el terrorismo, aunque aún no hayan sido usados para cometer un ataque terrorista;**
- **Estén vinculados con actividades terroristas que aún no hayan causado daños materiales;**
- **La congelación haya sido solicitada por otro Estado.**

El Comité contra el Terrorismo desearía recibir un esbozo de las disposiciones jurídicas, si las hubiere, que permiten al Brasil cumplir esos requisitos. En su defecto, ¿qué medidas prevé adoptar el Brasil para poner remedio a la situación?

La legislación del Brasil prevé medidas cautelares. Una decisión judicial puede dictar la congelación de fondos para impedir la comisión de un delito, así como para atender una solicitud formulada por otro Estado a tal fin. En cualquier caso, se ha de adjuntar a esa solicitud una relación precisa de las personas implicadas y sus activos, así como pruebas de la conexión entre esas personas y los actos delictivos.

Asimismo, el objetivo 20 de la Estrategia Nacional contra el Blanqueo de Dinero se propone introducir procedimientos administrativos para congelar activos ilícitos, lo que permitirá dar una respuesta más ágil a las transacciones financieras sospechosas²⁹.

1.9 El Comité contra el Terrorismo observa asimismo en el primer informe del Brasil (pág. 13) que, a efectos de la aplicación de la resolución y la prevención de actividades terroristas, el Brasil utiliza la lista de personas y organizaciones terroristas difundida por los Estados Unidos de América. ¿Está el Brasil autorizado para congelar los bienes de personas y organizaciones terroristas que no estén incluidas en la lista elaborada de conformidad con las disposiciones de la resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad? ¿Sería el Brasil tan amable de proporcionar al Comité contra el Terrorismo copias de las normas y los reglamentos pertinentes en este ámbito? En lo que respecta al cumplimiento del apartado c) del párrafo 1, ¿podría proporcionar el Brasil al Comité contra el Terrorismo datos estadísticos que muestren la cuantía de los bienes congelados, incautados o confiscados en relación con la financiación del terrorismo? ¿Podría el Brasil suministrar información pertinente en relación con las personas o entidades incluidas en las listas elaboradas por:

- El Consejo de Seguridad;
- El Brasil;
- Otros Estados u organizaciones internacionales?

El procedimiento cautelar vigente en el Brasil prevé la congelación de activos, aunque no existen disposiciones jurídicas concretas para los casos relacionados con las personas y organizaciones terroristas, con independencia de que sus nombres figuren en una lista. Al 1º de marzo de 2004, no se habían confiscado o incautado en el Brasil activos relacionados con la financiación del terrorismo.

Las listas de personas y entidades asociadas con las actividades terroristas que publica el Comité establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) y cualquier otro órgano pertinente de las Naciones Unidas son remitidas inmediatamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Banco Central del Brasil y el Departamento de Policía Federal a fin de detectar las transacciones financieras en que estén implicadas esas personas o entidades e impedir que esos individuos entren o salgan del país.

1.10 Con respecto a la aplicación eficaz de los apartados a) y c) del párrafo 1 de la resolución, así como del artículo 8 del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, el Comité contra el Terrorismo agradecería que el Brasil describiera los principales procedimientos jurídicos que rigen el decomiso de bienes o la aplicación de otros mecanismos de incautación. Señálese cómo se aplican esos procedimientos en la práctica y qué autoridades se encargan de su aplicación. ¿Es posible decomisar el producto de actividades delictivas sin haber obtenido antes la condena del autor (confiscación *in rem*)? De no ser así, ¿tiene previsto el Brasil introducir un sistema de ese tipo? El Comité agradecería recibir una relación detallada de las disposiciones que permitan el examen de las decisiones adoptadas por las autoridades a que se hace referencia en este párrafo. Sírvase describir la manera en que el Brasil prevé, en sus leyes y procedimientos, atender las solicitudes de asistencia jurídica

²⁹ Véase el documento adjunto.

internacional presentadas por otros países en relación con las medidas de decomiso resultantes de delitos de terrorismo.

En opinión del Brasil, el logro del objetivo 20 de la Estrategia Nacional contra el Blanqueo de Dinero redundará en beneficio del establecimiento de las medidas citadas en la pregunta 1.10. Las investigaciones en curso no han arrojado ningún resultado concluyente sobre la existencia de operaciones de financiación del terrorismo en el Brasil.

El 28 de mayo de 2002, el Proyecto de Ley 6764/02 fue adjuntado al Proyecto de Ley 2462/91, que define los delitos contra el Estado democrático de derecho en el ámbito nacional y los delitos contra la humanidad. Ambos proyectos de ley están siendo examinados por la Comisión de Relaciones Exteriores y Seguridad Nacional de la Cámara de Diputados.

La Ley de Seguridad Nacional³⁰ tipifica como delito los “actos de terrorismo” y establece penas de prisión para sus autores, aunque no recoge una definición de dichos actos, tal como se menciona en los informes anteriores.

1.11 El Comité contra el Terrorismo desearía recibir un informe sobre la situación de:

- **La aprobación de medidas adicionales para poner en práctica el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, como se indica en el tercer informe (págs. 4 y 5), particularmente en sus artículos 5, 8 y 18;**
- **La promulgación del Proyecto de Ley 6764/2002 y el PLS-117/2002;**
- **La ratificación de los tres convenios y protocolos internacionales relativos al terrorismo a los que el Brasil aún no se ha adherido;**
- **La incorporación a la legislación nacional de los instrumentos internacionales relativos al terrorismo que el Brasil ya ha ratificado, habida especial cuenta de una lista de las penas previstas para los delitos tipificados con objeto de cumplir los requisitos de los convenios y protocolos.**

En relación con esta cuestión, véase en la respuesta facilitada a la pregunta 1.1 la información relativa al establecimiento de la Estrategia Nacional contra el Blanqueo de Dinero durante el año 2004 y de la Dirección de Represión de Delitos Informáticos.

El PLS 117/02 entró en vigor como Ley 10701/03, que, entre otras cosas, tipifica la financiación del terrorismo como delito determinante del blanqueo de dinero.

El Brasil ya ha ratificado 9 de los 12 tratados relacionados con el terrorismo que figuran en la lista de la resolución 1373 (2001). El Brasil ya ha firmado los tres tratados restantes, aunque no los ha ratificado aún puesto que están siendo debatidos en el seno de la Cámara de Diputados, cuya aprobación es un procedimiento indispensable para autorizar al Gobierno del Brasil la ratificación de los tratados internacionales que imponen obligaciones al país. En enero, el Gobierno del Brasil envió a la Cámara de Diputados una solicitud oficial para acelerar el examen de los tres tratados restantes: i) Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de

³⁰ Ley 7170, de 14 de diciembre de 1983.

diciembre de 1999; ii) Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, de 10 de marzo de 1988; y iii) Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, de 10 de marzo de 1988.

Eficacia de los mecanismos de lucha contra el terrorismo

1.12 Para aplicar con eficacia las leyes relacionadas con la resolución 1373 (2001) que abarcan todos los aspectos de la resolución, los Estados deben tener mecanismos ejecutivos efectivos y coordinados, así como elaborar y aplicar estrategias nacionales e internacionales adecuadas de lucha contra el terrorismo. En ese contexto, sírvase especificar si en las estrategias o políticas del Brasil para combatir el terrorismo (a nivel nacional y subnacional) se incluyen las siguientes formas o aspectos de la actividad de lucha contra el terrorismo:

- Investigación y enjuiciamiento penal;
- Inteligencia para combatir el terrorismo (humana y técnica);
- Operaciones de fuerzas especiales;
- Protección física de posibles objetivos terroristas;
- Análisis estratégico y prevención de amenazas en ciernes;
- Análisis de la eficiencia de la legislación de lucha contra el terrorismo y sus enmiendas;
- Control fronterizo y de inmigración, control de prevención del tráfico de drogas, armas, armas biológicas y químicas, sus precursores y empleo ilícito de materiales radiactivos;
- Coordinación de los organismos estatales en todos esos ámbitos.

De ser posible, sírvase describir las disposiciones jurídicas, otros procedimientos administrativos y las prácticas óptimas en este ámbito.

La Ley 9807, de 13 de julio de 1999, establece las bases y las normas generales de la organización y el mantenimiento de los programas de protección de testigos y testigos amenazados e instituyen el Programa General de Asistencia a las Víctimas y los Testigos Amenazados, entre otras medidas.

En virtud del artículo 144 de la Constitución Federal del Brasil, la seguridad pública es un deber del Estado y el derecho y la responsabilidad de todos con el fin de preservar el orden público y la protección de las personas y los bienes. Las entidades a cargo de esta tarea son: i) el Departamento de Policía Federal; ii) el Departamento Federal de Policía Viaria; iii) el Departamento Federal de Policía Ferroviaria; iv) la Policía Civil; v) la Policía Militar y el Cuerpo de Bomberos. Según esta disposición constitucional, son varios los órganos encargados (en los planos local o federal) de mantener el orden en el Estado del Brasil. El Departamento de Policía Federal se encarga de investigar los casos de relevancia nacional como: el tráfico ilícito internacional de drogas, el contrabando, el tráfico de armas, los delitos contra el medio ambiente en zonas protegidas por la legislación federal, los derechos humanos, el terrorismo y otros asuntos. Además, el Departamento de Policía Federal es responsable de controlar la entrada y la salida de ciudadanos extranjeros, de expedir

pasaportes brasileños y de proteger a los dignatarios extranjeros de visita oficial en el Brasil.

En lo que respecta a la protección de posibles objetivos frente a presuntos actos terroristas (como embajadas y consulados), el Departamento de Policía Federal actúa (cuando así lo ordene su Director General, de conformidad con las normas jurídicas) en coordinación con la policía militar de cada Estado. Estas fuerzas tienen el cometido de proteger las zonas externas de los edificios, mientras que el Departamento de Policía Federal es responsable de la seguridad física del personal (embajadores y diplomáticos). En la actualidad, la subdivisión responsable de este tipo de protección es la Coordinación General de la Seguridad Institucional, que planifica y gestiona todas las medidas destinadas a garantizar la protección física de posibles objetivos terroristas. Las fuerzas armadas disponen de su propio sistema de protección.

Además de este tipo de protección de personas e instituciones, el Gobierno del Brasil promueve las actividades de inteligencia destinadas a prevenir atentados terroristas y obstruir su financiación. A fin de alcanzar este objetivo, diferentes órganos gubernamentales del Sistema Brasileño de Inteligencia (SISBIN) llevan a cabo actividades de inteligencia. Entre estas actividades, cabe citar el intercambio de información con órganos extranjeros de inteligencia, cumpliendo así lo dispuesto en los apartados a) y b) del párrafo 3 de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El sistema jurídico del Brasil incluye los siguientes actos legislativos relativos al terrorismo: Ley 7170/83 (Ley de Seguridad Nacional); decreto-Ley 2848/40 (Código Penal); Ley 9613/03 (que tipifica los distintos delitos de blanqueo de dinero); Ley 10744/03 (que regula la responsabilidad civil del Gobierno con respecto a terceras partes en caso de atentados terroristas, actos de guerra o actos similares perpetrados contra aeronaves brasileñas explotadas por compañías aéreas brasileñas, con exclusión de los “taxis aéreos”); Ley 8072/90 (relativa a la inadmisibilidad de la amnistía, la clemencia, la piedad, la fianza o la libertad provisional para las personas que hayan perpetrado actos de terrorismo); Ley 9034/95 (sobre la represión de la delincuencia organizada) con la enmienda de la Ley 10217/01 (relativa a la inteligencia y la infiltración de los agentes de policía).

El control de la inmigración corre a cargo del Departamento de Policía Federal, que es responsable de registrar la entrada y la salida de ciudadanos extranjeros. A tal efecto, se está procediendo a establecer un nuevo sistema denominado “Sentinela”, que se está poniendo a prueba en Fortaleza y Recife y se introducirá gradualmente en todos los aeropuertos, puertos y fronteras.

En relación con el tráfico ilícito de drogas, el Departamento de Policía Federal viene llevando a cabo un estricto control de los precursores químicos necesarios para producir sustancias narcóticas. La legislación en vigor correspondiente incluye la Ley 10409/02 y la Ley 6368/73. Además, el tráfico de drogas se ha estado combatiendo día a día. La legislación específica (Ley 10826/03) aumenta el plazo máximo de la pena penitenciaria prevista para algunos delitos. La fiscalización e inspección de artículos de posible utilidad con miras a la fabricación de armas químicas y biológicas corresponde al alto mando del Ejército por mediación del Departamento de Inspección de Sustancias Restringidas.

En lo que respecta a la utilización de material radiactivo ilícito, su vigilancia corresponde a la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), que lleva a cabo inspecciones de materiales radiactivos y nucleares de conformidad con la Ley 9765/98.

El Gobierno del Brasil es parte en prácticamente todos los acuerdos internacionales relativos a la lucha contra el terrorismo, de carácter regional, subregional o multilateral, que se han firmado en el marco del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) centra específicamente sus esfuerzos en la búsqueda y el análisis de información, así como en la detección de posibles amenazas, a fin de recomendar procedimientos de prevención y protección en general en el plano nacional. La ABIN intercambia información y conocimientos con servicios extranjeros similares.

Llegado el caso, las fuerzas especiales de la policía federal y estatal, así como las fuerzas armadas brasileñas, pueden colaborar bajo la coordinación del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República, que es la oficina ejecutiva de la Cámara de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional (CREDN)³¹.

Los controles fronterizos y aduaneros son permanentes y se pueden intensificar en función de las circunstancias.

1.13 En lo que concierne a la mención, en el tercer informe del Brasil, del PL 2858/2000 y del artículo 288 del Código Penal (página 10), sírvanse indicar en qué forma las disposiciones pertinentes del derecho brasileño legislan sobre el reclutamiento para organizaciones terroristas, incluidas las modalidades siguientes:

- Mediante engaño, a saber, la declaración de que el reclutamiento tiene un propósito (por ejemplo, la enseñanza) diferente del propósito verdadero;
- Mediante otras actividades, realizadas por personas que no pertenecen a una asociación ilícita.

Por un lado, el derecho brasileño no contiene disposiciones sobre la figura del “reclutamiento para organizaciones terroristas”. Por el otro, como se dice en el tercer informe al Comité contra el Terrorismo, el artículo 288 del Código Penal brasileño tipifica el delito de asociación destinada a la comisión de un delito con prescindencia de la existencia de estructura, división de funciones o empleo de violencia, intimidación, corrupción u otros medios similares. Si existe sospecha de que una organización legalmente constituida se aparta de sus propósitos originales y está reclutando personas para organizaciones terroristas, por ejemplo, las dependencias de policía e inteligencia competentes realizan una investigación para verificar los auténticos propósitos de la organización, confirmar o no la comisión del delito tipificado por el artículo 288 e instaurar las actuaciones judiciales que correspondan.

1.14 En el contexto de la aplicación eficaz del apartado e) del párrafo 2, sírvanse indicar qué técnicas investigativas especiales se pueden utilizar en el Brasil en relación con el terrorismo (por ejemplo, interceptación de comunicaciones;

³¹ El decreto 4801, de 6 de agosto de 2003, estableció la Cámara de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional.

vigilancia electrónica; observación; operaciones secretas; entregas vigiladas; “seudocompras” u otros “seudodelitos”; informantes anónimos; búsquedas transfronterizas; escuchas en locales públicos o privados, etc.). Sírvanse explicar estas técnicas y los recaudos legales que disciplinan su empleo. El Comité contra el Terrorismo está interesado en averiguar si estas técnicas se pueden aplicar únicamente a sospechosos, si requieren aprobación judicial y si su empleo está sujeto a plazos determinados, etc. ¿Podría el Brasil indicar si estas técnicas se podrían emplear en cooperación con otro Estado?

El Brasil no tiene ninguna confirmación de casos de actividades terroristas en el territorio, financiación de actividades terroristas, reclutamiento de personas para realizar actividades terroristas o apoyo a terroristas u organizaciones terroristas. Por lo tanto, no se están incoando acciones judiciales al respecto. Se está investigando la información que hace sospechar que ciertas operaciones podrían estar vinculadas con la financiación de actividades terroristas.

En lo que concierne a la inteligencia y a las investigaciones realizadas por organismos de seguridad, el Gobierno del Brasil ha tratado de investigar las actividades que podrían estar vinculadas con actos terroristas. A ese efecto, el Brasil emplea técnicas operacionales bien conocidas, conforme a las restricciones impuestas por las leyes nacionales, y aplica sus acuerdos con países limítrofes. Además, el Brasil ha suscrito acuerdos con otros países con la mira de ejecutar ciertas actividades conjuntas en relación con la búsqueda y el intercambio de información respecto de presuntos terroristas.

Las técnicas aplicadas por el Departamento de Policía Federal, dentro de los límites establecidos por ley, para reprimir actos terroristas y delitos conexos, son las siguientes:

- Interceptación de comunicaciones;
- Vigilancia de sospechosos;
- Vigilancia electrónica;
- Operaciones secretas;
- Informantes anónimos;
- Control de la entrada y salida de extranjeros;
- Ejecución de mandamiento judiciales (“mandamientos de allanamiento, incautación y detención”);
- Acceso a domicilios particulares (con la debida autorización legal);
- Intercambio de información con otros organismos de inteligencia.

La Constitución Federal del Brasil de 1988 autoriza la interceptación de comunicaciones (artículo 5, XII). Sin embargo, se requiere siempre una autorización judicial; la normativa pertinente figura en la Ley 9296/96.

En el Brasil puede haber una vigilancia transfronteriza sólo cuando así lo autoriza un acuerdo bilateral. No se han suscrito todavía acuerdos bilaterales sobre este tipo de vigilancia.

A efecto de allanar locales privados, el DPF debe obtener el consentimiento del residente o, en horas del día, un mandamiento judicial, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Constitución Federal del Brasil.

La entrada y salida de extranjeros y los procedimientos para solicitar visado de residente permanente o naturalizarse se consignan en la Ley 6815/80, que dispone sobre el estatuto jurídico de los extranjeros en el Brasil, crea el Consejo Nacional de Inmigración y establece otras medidas.

Las escuchas de conversaciones telefónicas, la vigilancia electrónica y el allanamiento de domicilios particulares se pueden realizar en caso de sospecha de actividad delictiva con la previa autorización de la justicia.

La Constitución Federal no autoriza el uso de esos procedimientos por un tercer país dentro del territorio brasileño. El artículo 144 dispone que la Policía Federal debe investigar los delitos contra el orden político y social, que comprenden los actos terroristas y su financiación.

1.15 Con miras a poner a los terroristas y a sus colaboradores a disposición de la justicia, sírvanse indicar si el Brasil ha adoptado medidas para proteger a personas vulnerables en el enjuiciamiento de delitos de terrorismo (por ejemplo, protección de las víctimas, las personas que colaboren con el proceso judicial, los testigos, los jueces y los fiscales). Sírvanse describir las disposiciones legales y administrativas adoptadas para garantizar esa protección. ¿Podría el Brasil indicar si esas medidas se podrían utilizar en cooperación o a petición de otro Estado?

La Ley 9807 de 13 julio de 1999 estatuye las normas general y el fundamento de la organización y el mantenimiento de los programas de protección de víctimas y testigos amenazados e instituye también, entre otras providencias, el Programa Federal de Asistencia a las Víctimas y Testigos Amenazados.

Los artículos 7 y 9 de la Ley 9807/99 establecen las medidas que se pueden adoptar para proteger a las personas vulnerables, como las víctimas y los testigos, en relación con las causas por delitos de terrorismo, a saber:

Art. 7. El programa [de protección] comprende, entre otras cosas, las siguientes medidas, que podrán aplicarse separada o simultáneamente en beneficio de la persona protegida, de acuerdo con la gravedad y las circunstancias del caso:

- I. Seguridad en el domicilio, incluido el control de las comunicaciones;
- II. Escoltas y seguridad durante los desplazamientos, incluso los viajes de cercanías y la comparecencia a las audiencias;
- III. Cambio de domicilio o alojamiento provisional con fines de protección;
- V. Ayuda financiera mensual para subvenir a las necesidades básicas del interesado y sus familiares cuando la persona protegida no puede continuar su ocupación habitual o carezca de otra fuente de ingresos;
- VI. Suspensión temporaria de la actividad profesional, sin que ello afecte a sus emolumentos y prestaciones, cuando se trate de un funcionario público o un miembro de las fuerzas armadas;
- VII. Asistencia social, médica y psicológica;

VIII. Privacidad de los actos realizados mientras la persona se encuentre amparada por la protección;

IX. Asistencia del órgano ejecutivo del programa para facilitar la observancia de las obligaciones civiles y administrativas que puedan requerir una presencia física;

Párrafo único. La ayuda financiera mensual ascenderá a la cuantía máxima que determine el consejo de administración al principio de cada ejercicio fiscal.

Art. 9. En casos excepcionales y según las características y la gravedad de la coerción y de la amenaza, el consejo de administración podrá cursar las peticiones de la persona protegida al juez competente a fin de alterar su nombre y apellido en el registro civil.

1.16 El Brasil hace referencia en el tercer informe (página 4) a la tipificación como delito, en virtud del artículo 24 de la Ley 7170/83, de la constitución, la integración o el sostenimiento de organizaciones terroristas. Sírvanse describir el procedimiento utilizado para proscribir a las organizaciones terroristas foráneas (distintas de las incluidas en lista por el Consejo de Seguridad), si las hubiese, y presentar datos respecto del número de organizaciones de que se trate o los ejemplos que correspondan. ¿Qué plazo se necesita para proscribir a una organización terrorista a petición de otro Estado o en virtud de información suministrada por otro Estado?

La proscripción de organizaciones terroristas a petición de otros Estados no es práctica corriente en el Brasil. El plazo que se necesite para atender a peticiones concretas dependerá de la situación. Las urgencias y las investigaciones ordinarias se tramitan de diversas maneras. Se responde a las rogatorias con la mayor celeridad posible.

Pese a los constantes esfuerzos del Gobierno del Brasil por acopiar información sobre actividades sospechosas, hasta ahora no se han allegado pruebas respecto de la existencia de actividades relacionadas con el terrorismo en el Brasil.

1.17 En el contexto de la aplicación eficaz del apartado e) del párrafo 2, ¿podría el Brasil transmitir al Comité contra el Terrorismo la información relativa al número de enjuiciados en el país por los siguientes actos?

- Actividades terroristas;
- Financiación de actividades terroristas;
- Reclutamiento para organizaciones terroristas;
- Apoyo a terroristas u organizaciones terroristas.

¿Cuántas de estas personas han sido enjuiciadas por solicitar apoyo (incluido el reclutamiento) con destino a:

- Organizaciones proscritas; y
- Otros grupos u organizaciones terroristas?

Se ha investigado a sospechosos de estar vinculados con cualquier tipo de actividad relacionada con el terrorismo. Sin embargo, hasta ahora no ha habido confirmación de su intervención concreta en actividades terroristas.

Eficacia de los controles de aduanas, inmigración y fronteras

1.18 La aplicación eficaz de lo dispuesto en los apartados c) y g) del párrafo 2 de la resolución requiere la existencia de unos controles eficaces de aduanas, inmigración y fronteras para impedir el movimiento de terroristas y el establecimiento de refugios. A este respecto, sírvanse describir los procedimientos legales y administrativos establecidos por el Brasil a los efectos de la protección de puertos y buques, las personas que trabajen en puertos y buques, las cargas, las unidades de transporte de carga, las obras frente a la costa y las provisiones de a bordo contra los riesgos de ataques terroristas. ¿Han establecido las autoridades competentes del Brasil procedimientos para examinar y actualizar periódicamente los planes de seguridad del transporte? En caso afirmativo, sírvanse suministrar la información correspondiente.

La vigilancia de los puertos del Brasil y el control de arribos, amarres y partidas se lleva a cabo en coordinación con los siguientes organismos: i) la Marina brasileña se ocupa de autorizar la entrada de buques en el territorio brasileño; ii) el Departamento de Policía Federal se ocupa de investigar, entre otras cosas, el contrabando y el tráfico de armas y drogas e informa de las entradas y salidas de extranjeros; iii) el Ejército brasileño fiscaliza la exportación e importación de armamentos y materiales restringidos; iv) la Secretaría Federal de Impuestos y Rentas atiende a la inspección de mercancías que entran o salen del país.

El Gobierno del Brasil está tratando de que todos los puertos y buques en el Brasil se conformen a las prescripciones del nuevo Código Internacional de Seguridad de Puertos y Buques (Código ISPS), aprobado por la Organización Marítima Internacional (OMI), que ha de entrar en vigor en julio de 2004. Los buques son inspeccionados y reciben un certificado de la “Dirección de Puertos y Costas”, dependiente de la Marina del Brasil³². Hasta ahora, alrededor del 60% (sesenta por ciento) de los buques brasileños cumplen las prescripciones mencionadas en el Código ISPS y en breve recibirán la certificación oficial. En relación con los puertos, la Comisión Nacional de Seguridad Pública en Puertos, Obras Portuarias y Vías Navegables (CONPORTOS)³³, dependiente del Ministerio de Justicia, aprobó la Resolución

³² En portugués “*Diretoria de Portos e Costas*”. Véase su página inicial en <http://www.dpc.mar.mil.br>.

³³ El decreto 1507, de 30 de mayo de 1995, creó la Comisión de Seguridad Pública de Puertos, Obras Portuarias y Vías Navegables (CONPORTOS); el decreto fue modificado por el decreto 1972, de 30 de julio de 1996. CONPORTOS se compone del Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Defensa (representado por el Comando de Marina), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Transporte. Las Comisiones Estatales de Seguridad Pública de Puertos, Obras Portuarias y Vías Navegables (CESPORTOS) también formarán parte de CONPORTOS. El principal objetivo de CONPORTOS es crear y aplicar un sistema de prevención y lucha contra actos ilícitos en los puertos, las obras portuarias y las vías navegables. La competencia de CONPORTOS abarca lo siguiente: i) crear e instalar Comisiones Estatales de Seguridad Pública de Puertos, Obras Portuarias y Vías Navegables (CESPORTOS); ii) encargarse de la seguridad pública en los puertos, las obras portuarias y las vías navegables; iii) solicitar, cuando sea necesaria, asistencia técnica y financiera a países donantes e instituciones financieras internacionales por conducto de la Organización Marítima Internacional (OMI); iv) sugerir medios a los órganos competentes para perfeccionar la legislación vigente; v) analizar los programas para mejorar las actividades de seguridad pública en los puertos, las obras portuarias y las vías navegables; vi) preparar análisis estadísticos acerca de los actos ilícitos en los puertos, las obras portuarias y las vías navegables; vii) transmitir a los órganos competentes unas evaluaciones periódicas sobre las necesidades de

18, de 18 diciembre de 2003, sobre los procedimientos para verificar, enmendar, actualizar y examinar los Planes de Seguridad Pública de las Obras Portuarias³⁴.

1.19 En el contexto de la aplicación de los apartados b) y j) del párrafo 2, ¿ha dado efecto el Brasil a las normas y recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) según se describe en el anexo 17? Sírvanse informar al Comité contra el Terrorismo de si la OACI ha realizado una auditoría de seguridad de los aeropuertos internacionales del Brasil.

El Brasil ha dado efecto a las normas y recomendaciones descritas en el anexo 17, con las siguientes reservas:

- i) Norma 2.1.3: los principios que rigen las medidas destinadas a la prevención de actos de injerencia ilícita en la aviación civil internacional no se aplican todavía a los vuelos de cabotaje en el Brasil. El Gobierno del Brasil ha decidido que las contramedidas de seguridad de la aviación civil deben estar en consonancia con los niveles de peligro y riesgo identificados.
- ii) Norma 2.3.1: las rogatorias de otros Estados respecto de controles especiales de seguridad para un vuelo o vuelos determinados de empresas aéreas de los Estados requirentes se concederán condicionalmente en función de los costos adicionales que puedan imponer. El Gobierno del Brasil ha decidido que las empresas aéreas del Estado requirente que soliciten controles especiales de seguridad deberán solventar los gastos adicionales correspondientes que se deriven del establecimiento de esos controles.
- iii) Norma 2.3.2: El Brasil cooperará con otros Estados en relación con sus respectivos programas nacionales de seguridad de la aviación, pero conforme a los arreglos que se hayan convenido con ellos. El Gobierno del Brasil ha decidido que la cooperación en asuntos de seguridad se ha de instrumentar por conducto de los arreglos que pacten los Estados interesados.
- iv) Norma 3.4.1: El Brasil no puede todavía dar pleno efecto a esta norma porque las dificultades jurídicas y técnicas impiden efectuar averiguaciones de antecedentes de particulares. Por cuanto esta situación se plantea aparentemente en muchos Estados Contratantes, el Gobierno del Brasil cree que esta Norma debiera volver al estatuto de Práctica Recomendada.
- v) Norma 3.4.4: aún no se han ultimado las orientaciones y documentos de la OACI sobre el asunto. El Brasil desea dar cumplimiento a esta norma. Cuando la OACI distribuya las orientaciones y documentos necesarios, el Brasil dará efecto al programa nacional de control de calidad de la seguridad de la aviación civil, en la medida en que sea posible.
- vi) Normas 2.1.1, 3.2.4, 3.2.5 y 3.2.6 y Prácticas Recomendadas 2.1.4 y su nota 1; 2.2.1, 2.3.6 y 5.3.2: El Brasil continuará adaptando estas disposiciones en cuanto corresponda a la aviación civil internacional.

la seguridad pública en los puertos, las obras portuarias y las vías navegables; viii) ayudar a las CESPORTOS cuando sea necesario; y ix) analizar y aprobar los Planes de Seguridad elaborados por las CESPORTOS.

³⁴ Para más información sobre la plena aplicación del Código ISPS en obras portuarias, véase la página inicial en http://www.mj.gov.br/senasp/senasp/conselhos_conportos.htm.

En cuanto a la segunda parte de la pregunta, cabe decir que la OACI no ha realizado todavía una auditoría de seguridad de los aeropuertos internacionales del Brasil.

Eficacia de los controles para evitar el acceso de los terroristas a armas

1.20 El apartado a) del párrafo 2 de la resolución requiere que todos los Estados Miembros establezcan, entre otras cosas, mecanismos adecuados para negar a los terroristas el acceso a armas. Con respecto a este requerimiento de la resolución y también a las disposiciones del Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección y el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, se ruega suministrar al Comité información pertinente a los siguientes asuntos:

- **Legislación, reglamentos, procedimientos administrativos**

El Gobierno del Brasil ya ha firmado y ratificado los dos tratados mencionados en la pregunta 1.20: i) el Gobierno del Brasil firmó el Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección el 1º de marzo de 1991, lo ratificó el 4 de octubre de 2001 y lo aplicó internamente mediante el decreto 4021 de 19 de noviembre de 2001; y ii) el Gobierno del Brasil firmó el Convenio para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas el 12 de marzo de 1999, lo ratificó el 23 de agosto de 2002 y lo aplicó internamente mediante el decreto 4394 de 26 de septiembre de 2002.

Hay dos elementos de legislación principales que establecen las normas para el uso y manejo debido de armas en el Brasil en sus diversos aspectos: i) el decreto 3665, sancionado el 20 de noviembre de 2000, sobre la supervisión de las actividades de individuos y personas jurídicas (almacenes y distribuidores de armas) relacionadas con productos controlados por el Ejército. Estas actividades son, entre otras, la producción, la recuperación, el mantenimiento, la utilización industrial y la comercialización de armas, generalmente las de gran calibre y uso restringido. La Dirección de Fiscalización de Productos Controlados (DFPC)³⁵, que depende del Comando del Ejército, que a su vez depende del Ministerio de Defensa, es el principal órgano encargado de aplicar lo dispuesto en el decreto 3665/00; ii) la Ley 10826, sancionada el 22 de diciembre de 2003, establece normas y reglamentos estrictos sobre el registro, la adquisición, la posesión y la comercialización de armas, principalmente las de uso individual. También concede facultades más rigurosas al Sistema Nacional de Armas (SINARM)³⁶ dirigido por el Departamento de Policía Federal (DPF) del Ministerio de Justicia. Según esta nueva ley, también llamada “Ley de desarme”, sólo la Policía Federal estará facultada para emitir permisos de uso de armas; la policía de los estados ya no tendrá esta facultad, que le concedía la ley anterior. Además, muy pocos organismos de seguridad, aparte de la policía y de las fuerzas armadas, y muy pocos individuos tendrán permiso para llevar armas, a

³⁵ En portugués “Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados”. En la página en la Web de esta dirección figura información en portugués sobre listas de productos controlados por el Ministerio de Defensa (como armas, municiones, explosivos, productos químicos delicados, productos químicos de uso militar, artefactos pirotécnicos, armaduras y chalecos a prueba de balas); las reglas de adquisición, importación y exportación; legislación general; control; registro; legislación. Véase el sitio en la Web <http://www.dfpc.eb.mil.br>.

³⁶ En portugués “Sistema Nacional de Armas”.

menos que demuestren que participan en actividades profesionales muy peligrosas o que han sufrido amenazas reiteradas a su integridad física.

– **¿Qué medidas nacionales existen para prevenir la producción, la acumulación, la transferencia y la posesión de:**

- **Armas de fuego, piezas y componentes y municiones de armas de fuego;**
- **Explosivos plásticos;**
- **Otros explosivos y sus precursores sin marcar o insuficientemente marcados?**

El decreto 3665/00 fija controles estrictos para prevenir la producción, acumulación, transferencia y posesión de armas de fuego, explosivos plásticos y otros explosivos y sus precursores no marcados o insuficientemente marcados. El decreto y su reglamento complementario (*Portarias*) también especifica normas para las marcas de las armas, que deben ser lo bastante profundas, según criterios técnicos, para que sea difícil borrarlas o removerlas. Cuando se decomisan en el Brasil armas de fuego procedentes del extranjero no marcadas o insuficientemente marcadas, el Departamento de Policía Federal las destruye rápidamente, a menos que sirvan de prueba en investigaciones penales.

Aparte de las medidas legislativas, hay que hacer operaciones del DPF de reunión de información encaminadas a identificar organizaciones criminales y el tráfico ilícito, además de actividades sistemáticas de lucha contra el delito.

• **Control de exportaciones**

– **Sírvase describir el sistema de permiso o autorización de exportaciones e importaciones, y las medidas relativas al tránsito internacional adoptadas por el Brasil para la transferencia de:**

- **Armas pequeñas y armas ligeras;**
- **Otras armas de fuego, partes y componentes y municiones de armas de fuego;**
- **Explosivos plásticos;**
- **Otros explosivos y sus precursores.**

El decreto 3665 de 20 de noviembre de 2000 actualiza el reglamento relativo a la inspección de mercancías sometidas al control de la Dirección de Fiscalización de Productos Controlados del Ministerio de Defensa (R-105). El primer anexo del decreto 3665/00 indica sus objetivos principales; definiciones; metas generales que deben alcanzarse mediante el plan de inspección; reglas generales sobre productos controlados y servicios relacionados con ellos; entidades que participan en el plan de inspección; responsabilidades, facultades y estructura de las entidades encargadas

de la inspección; procedimientos relacionados con el registro nacional³⁷; condiciones y requisitos para las industrias que producen productos controlados; la inspección de actividades nacionales: producción, empaquetamiento, acumulación, almacenamiento, seguridad, inspección, adquisición, transporte, exposición, tránsito³⁸ y comercio de productos controlados; inspección del comercio exterior: exportación, importación, procedimientos de aduana; procedimientos y penas administrativos para los que no cumplan las reglas establecidas en el decreto; decomiso y destrucción de productos controlados.

Según el artículo 8 del decreto 3665/00, un producto se incluye en la lista de productos bajo control estricto del Ministerio de Defensa si tiene potencial para causar destrucción u otra característica peligrosa que justifique restringir el uso del producto a las personas naturales o personas jurídicas legalmente autorizadas con competencias técnicas, morales y psicológicas determinadas a fin de garantizar la seguridad de la sociedad y del país.

El artículo 9 del decreto 3665/00 estableció requisitos específicos, como la expedición de certificados y otros documentos, generalmente bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa, a fin de autorizar la producción, el uso, la importación, la exportación, los procedimientos de aduana, el tránsito y el comercio de productos controlados.

El tránsito internacional de armas por el territorio brasileño está sujeto a procedimientos específicos de autorización establecidos por el decreto 3665 de 20 de noviembre de 2000 a fin de evitar la posibilidad de procedimientos de desviación de armas. La política actual del Gobierno es no conceder permisos de tránsito.

La Ley 9112 de 10 de octubre de 1995, titulada “Reglas para la exportación de productos delicados y servicios directamente vinculados con ellos”, también es una disposición legislativa esencial del sistema de control de exportaciones del Brasil. El artículo 1 define “productos para uso en tiempo de guerra”, “productos de doble uso”, “productos para uso en la esfera nuclear”, “productos químicos y biológicos” y enumera los servicios directamente vinculados con estos productos que están sometidos a controles de exportación. El artículo 2 dice que los productos controlados se incluyen en Listas de Productos Delicados, que se actualizan periódicamente y se publican en el *Diario Oficial del Gobierno Federal (Diário Oficial da União)*. El artículo 3 establece procedimientos específicos de concesión de permiso. El artículo 4 establece una Comisión Interministerial de Control de las Exportaciones de Productos Delicados, dependiente de la Oficina del Presidente de la República, formada por representantes de las entidades federales que participan en el proceso de exportación de los productos incluidos en el ámbito de la Ley 9112/95. El artículo 5 indica las principales

³⁷ El artículo 39 del anexo del decreto 3665/00 dice que “el registro es obligatorio para las personas naturales y las entidades jurídicas, del sector público y el sector privado, que produzcan, usen industrialmente, almacenen, comercien, exporten, importen, manipulen, transporten, mantengan en debido estado y arreglen productos delicados controlados por el Ministerio de Defensa”. El artículo 40 dice que “las personas naturales y las entidades jurídicas, inscritas o no, que manejen productos delicados controlados por el Ministerio de Defensa están sujetas a inspección, control y penas conforme a la presente ley y a la legislación complementaria pertinente en vigor”.

³⁸ El artículo 165 del anexo del decreto 3665/00 dice que “los productos controlados sujetos a inspección de tránsito transitarán dentro de los límites del país sólo después de haber obtenido permiso específico de las autoridades de inspección del Ministerio de Defensa mediante un documento válido nacionalmente titulado GT, Anexo XXIX”.

obligaciones y facultades de la Comisión a que se refiere el artículo 4. Los artículos 6 y 7 especifican penas para las infracciones del control de exportaciones. El artículo 8 dice que el Ministerio de Defensa es la autoridad supervisora para todas las transacciones de productos y servicios delicados. El artículo 9 faculta al Poder Ejecutivo para regular todas las transacciones de exportación de los productos y servicios delicados. El artículo 10 dice que la ley entrará en vigor el 10 de octubre de 1995.

La Ley 9112/95 y los decretos presidenciales pertinentes asociados con el ingreso en el Grupo de Proveedores Nucleares y el Régimen de Control de la Tecnología de Projectiles forman la “Política nacional de exportación de productos militares” (PNEMEN).

En cuanto al permiso y autorización de exportación, depende de la aprobación del Ministerio de Defensa. Todas las solicitudes deben incluir documentación completa que se somete a la aprobación del Comando del Ejército. Si considera que la solicitud cumple los requisitos, el Comando aprueba el permiso de importación conforme al Sistema de Comercio Exterior Integrado del Brasil (SISCOMEX)³⁹, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda.

Después que la solicitud de importación ha sido registrada por el SISCOMEX, se expide otro permiso para autorizar la expedición. En cuanto la mercancía llega al país, la aduana la retiene para despacho, que se hace mediante la presencia de un funcionario aprobado del Ministerio de Defensa y otro de la Aduana brasileña. El producto se verifica dos veces y su contenido se coteja con las especificaciones indicadas en el documento de importación.

El permiso o autorización de exportación también requiere una solicitud plenamente documentada por la parte interesada, que tiene que especificar el país a que se propone exportar y el producto mismo. Si se refiere a armas empleadas por las fuerzas armadas, la autorización depende de una autorización conjunta del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Otras armas (de bajo calibre) dependen de la aprobación del Comando del Ejército.

- **Sírvase especificar los procedimientos de control de las exportaciones y el mecanismo en vigor para el intercambio de información sobre fuentes, rutas y métodos de los comerciantes de armas.**

Las fuentes, rutas y métodos de los comerciantes son analizados por los órganos de inteligencia de la policía y las fuerzas armadas. A los efectos de los procedimientos de control de exportaciones, el Brasil no permite actualmente el tránsito de armas controladas por su territorio.

- **¿Es necesario presentar y registrar o comprobar la declaración de mercancías y los documentos de apoyo relativos a armas de fuego antes de la importación, exportación o tránsito de las mercancías? ¿Se alienta a los importadores, exportadores o terceros a presentar información a la Aduana antes de la expedición de la mercancía? Sírvase indicar también todo mecanismo adecuado para verificar la autenticidad de los documentos de permiso o autorización de la importación, la exportación o el tránsito de armas de fuego.**

Las funciones de registro y comprobación se hacen principalmente mediante el SISCOMEX. La Aduana brasileña, en coordinación con el Comando del Ejército, se

³⁹ Para información adicional sobre el SISCOMEX, véase el sitio <http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/siscomex/siscomex.htm>.

basa en el SISCOMEX para llevar registros y asegurar el cumplimiento de la declaración de mercancías y los documentos de apoyo relativos a armas de fuego antes de la importación o exportación. El SISCOMEX ha sido uno de los primeros sistemas del mundo que han integrado el control de aduanas en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos, permitiendo la recaudación computadorizada de impuestos. El sistema ha funcionado desde 1994 para las exportaciones y desde 1997 para las importaciones.

Integrando los controles en las esferas comercial, administrativa, fiscal y monetaria, el SISCOMEX ha racionalizado el uso de información y, como consecuencia, eliminado los documentos de papel. Por consiguiente, la declaración de mercancías relativa a armas de fuego debe presentarse mediante un permiso electrónico obtenido del SISCOMEX antes de la importación o exportación. El sistema comprueba la información e identifica el permiso, que tiene que ser corroborado después por comprobación física in situ.

- **¿El Servicio de Aduanas del Brasil aplica un sistema de gestión del riesgo basado en información en las fronteras para identificar las mercancías peligrosas? Sírvase indicar los datos que requiere la Administración de Aduanas para identificar una remesa peligrosa antes de la expedición.**

La Aduana del Brasil emplea la gestión del riesgo basada en la información para detectar todos los tipos de fraude, como el relacionado con el tráfico ilícito de drogas y armas. Se aplican dos métodos de evaluación: i) el riesgo objetivo, que se determina combinando aspectos como la naturaleza de las mercancías, los medios de transporte, el país de origen y el método de arrumazón; y ii) el riesgo subjetivo, que se estima interpretando las formas de comportamiento y los perfiles de los actores que intervienen, como los importadores, transportistas y agentes.

Los procedimientos para evaluar eficazmente el riesgo incluyen evaluaciones intersectoriales por computadora, el intercambio de información entre dependencias aduaneras internas y otros organismos, nacionales y extranjeros. El acceso a la Red de Ejecución Aduanera (CEN) de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) también ha resultado un instrumento muy eficaz, junto con la participación de la Aduana brasileña en la Oficina de Enlace Regional de Inteligencia Aduanera.

La Aduana del Brasil ha aumentado su capacidad de evaluación del riesgo estableciendo una Oficina Central de Inteligencia y una red que vincula los oficiales de inteligencia locales que trabajan con instrumentos de análisis del riesgo para detectar mercancías y operaciones potencialmente peligrosas.

- **Agentes**

- **¿Requieren las leyes del Brasil revelar, en los permisos o autorizaciones de importación o exportación o en los documentos adjuntos, los nombres y direcciones de los agentes que participan en la transacción?**

La legislación brasileña no permite secreto alguno con respecto al comercio de armas de fuego y otras armas. El público tiene acceso a este tipo de información sin restricciones.

- **¿Las disposiciones legislativas en vigor prevén el intercambio de información pertinente con contrapartes extranjeras para permitir la cooperación en la prevención de la expedición ilegal de armas de fuego, partes y componentes y municiones de armas de fuego y también de explosivos y sus precursores?**

No hay impedimento legislativo al intercambio de información con contrapartes extranjeras para permitir la cooperación en la prevención de la expedición ilegal de armas de fuego y otros productos. Al contrario, se alienta el intercambio de información con ese fin, incluso cuando no existen acuerdos bilaterales sobre asistencia jurídica mutua.

- **Gestión y seguridad de almacenes**

- **¿Qué normas y procedimientos nacionales existen para la gestión y la seguridad de las existencias de armas de fuego y explosivos del Gobierno del Brasil (en particular las de las fuerzas armadas, la policía etc.) y otros órganos autorizados?**

El Brasil no tiene una fuerza de policía unificada. Aparte de la Policía Federal, hay una policía vial federal y también fuerzas policiales civiles y militares de los Estados, que abarcan todas las unidades de la Federación. Cada una de estas fuerzas de policía controla plenamente sus normas y procedimientos para la gestión y la seguridad de las armas de fuego, aunque todas ellas tienen que ajustarse a los procedimientos establecidos en el decreto 3665/00 y otra legislación pertinente⁴⁰. Si falta un arma, se inician procedimientos administrativos.

- **¿Ha aplicado el Brasil, empleando principios de evaluación del riesgo, alguna medida especial de seguridad en relación con la importación, la exportación y el tránsito de armas de fuego, como hacer inspecciones de seguridad del almacenamiento temporal y de los medios de transporte que llevan armas de fuego, y exigir que las personas que participan en tales operaciones sean sometidas a un control de seguridad? Si así es, sírvase dar detalles.**

Se hacen inspecciones de seguridad estrictas en todas esas fases, como se ha indicado en las respuestas anteriores sobre la legislación y sobre los procedimientos de exportación e importación. En cuanto al almacenamiento, los agentes de policía (cualquiera que sea la fuerza a que pertenezcan) encargados de la vigilancia deben participar en sistemas de guardia de rotación constante, en los cuales cada agente tiene que comprobar la cantidad de armas que ha dejado por el turno anterior, con penas severas en caso de desaparición de artículos.

- **Represión del tráfico ilegal**

- **¿Qué medidas especiales aplica el Brasil para impedir y reprimir el tráfico ilegal de las armas de fuego, las municiones y los explosivos utilizados por los terroristas?**

Aparte de mantener un sistema de base de datos actualizado para llevar cuenta de las armas, legales e ilegales, el Departamento de Policía Federal hace operaciones conjuntas de inteligencia con otras fuerzas de policía nacionales y también con con-

⁴⁰ Para más información sobre este tema, véanse las observaciones sobre “Legislación, reglamentos, procedimientos administrativos” y “Control de exportaciones” *supra*.

trapartes extranjeras. El DPF ha establecido mecanismos conjuntos con países vecinos a fin de intercambiar técnicas e información sobre posibles traficantes de armas. Por ejemplo, el Brasil tiene un acuerdo oficial con el Paraguay por el cual las autoridades paraguayas tienen que comunicar constantemente listas de las armas adquiridas por ciudadanos brasileños en ese país y viceversa.

El DPF también ha instalado a servicios especiales de inteligencia en las fronteras con Colombia y el Paraguay a fin de fomentar la cooperación en la detección del tráfico de armas (entre otros delitos), a menudo con apoyo logístico de las fuerzas armadas.

Bajo los auspicios de acuerdos bilaterales contra el tráfico de drogas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de la Dirección General de Lucha contra el Delito Transnacional, organiza reuniones anuales de lucha contra el tráfico de drogas con la participación de representantes de varios órganos gubernamentales. En estos foros, la prevención y el control del tráfico de armas es uno de los principales temas del orden del día.

En 2003 el DPF estableció en su oficina central en Brasilia una Dirección de Lucha contra la Delincuencia Organizada (DCOR) e incluyó en ella la División de Lucha contra el Tráfico de Armas Ilícitas (DARM). Además, se crearon Oficinas de Lucha contra el Tráfico de Armas Ilícitas (DELEARM) en cada Superintendencia Regional, en cada uno de los 27 estados federativos del Brasil. Estas Oficinas combaten sistemática y eficazmente el tráfico de armas en el Brasil mediante la coordinación con varios órganos policiales, nacionales e internacionales, y mediante técnicas de inteligencia policial.

1.21 En lo que respecta a los requisitos establecidos en el apartado a) del párrafo 2 de la resolución, ¿podría el Brasil esbozar los mecanismos y procedimientos en vigor para aplicar las disposiciones legales o controles sobre la exportación de productos, la transferencia de tecnología, la prestación de asistencia técnica en el extranjero y las actividades relacionadas con el comercio de los productos bajo control, a fin de evitar que los terroristas tengan acceso a las armas o los materiales peligrosos? El Comité contra el Terrorismo agradecería que el Brasil le presentara estadísticas sobre la aplicación de las disposiciones legales para evitar que los terroristas tengan acceso a las armas.

No existen estadísticas al respecto puesto que el Brasil aún no ha establecido ningún caso de tráfico ilícito de armas relacionado con el posible acceso de terroristas, a pesar de las constantes medidas preventivas que se adoptan y que se describen en las respuestas anteriores. Los grupos de delincuentes organizados del Brasil tienen características concretas asociadas por lo general con actividades lucrativas que, hasta el presente, no han puesto de manifiesto ninguna conexión con actividades terroristas, a pesar de las investigaciones de algunas pistas.

1.22 Sírvase esbozar las disposiciones legales que el Brasil ha puesto en vigor para evitar que los terroristas adquieran, por medios lícitos o ilícitos, materiales peligrosos, como por ejemplo materiales radiológicos, químicos y biológicos, sus productos de desecho, así como armas nucleares, químicas y biológicas. ¿Ha establecido el Brasil un procedimiento nacional de presentación de informes o de auditorías para detectar la pérdida o el robo de los materiales peligrosos mencionados, ya sea en posesión del Gobierno o de órganos privados?

La Ley 9112, de 10 de octubre de 1995, rige la exportación de los productos delicados y los servicios directamente vinculados con ellos, a saber, los productos

que se utilizan en tiempo de guerra, los de doble uso y los que se utilizan con fines nucleares, químicos y biológicos. En la ley se dispone la creación de listas de productos delicados cuya exportación está sujeta a la previa autorización del Gobierno.

Con arreglo a la Ley 9112/95, también se estableció una comisión interministerial de control de las exportaciones de productos delicados, encargada del mantenimiento de las listas a que se ha hecho referencia, la propuesta de criterios y procedimientos de control, y la aplicación de las penas previstas. Dichas listas se actualizaron dos veces en 2001 (Reglamento administrativo MCT/MD 631, de 13 de noviembre de 2001 y Reglamento administrativo MCT 804, de 13 de diciembre de 2001), disponiéndose la inclusión de las sustancias químicas enumeradas en la Convención sobre las armas químicas.

Con arreglo al decreto 4214, de 30 de abril de 2002, el Ministerio de Ciencia y Tecnología coordina los trabajos de la Comisión Interministerial de Control de Exportaciones de Productos Delicados, integrada por representantes de los ministerios siguientes: i) el Ministerio de Ciencia y Tecnología⁴¹; ii) el Ministerio de Defensa⁴²; iii) el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior⁴³; iv) el Ministerio de Finanzas; v) el Ministerio de Justicia; y vi) el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el artículo 4 del decreto 4214/02 se dispone lo siguiente:

Artículo 4. Es competencia de la Comisión:

- I. Establecer los reglamentos administrativos, los criterios, los procedimientos y los mecanismos de control que han de adoptarse respecto de la exportación de los productos delicados y los servicios directamente relacionados con ellos, conforme a lo dispuesto en la Ley 9112, de 1995;
- II. Establecer, actualizar y divulgar la lista de los productos delicados;
- III. Imponer sanciones administrativas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 9112, de 1995;

Párrafo 1. La Comisión, en el ejercicio de su competencia:

- I. Analizará todos los casos en que hayan podido llevarse a cabo actividades prohibidas por las convenciones o regímenes internacionales que rigen la transferencia de productos delicados, en particular:
 - a) La Convención sobre la prohibición de las armas químicas⁴⁴;
 - b) La Convención sobre la prohibición de las armas biológicas⁴⁵;
 - c) El Régimen de Control de la Tecnología de Misiles; y
 - d) El grupo de suministradores nucleares;
- II. Analizará y debatirá las propuestas y las investigaciones que contribuyan al logro de sus objetivos;

⁴¹ Véase <http://www.mct.gov.br>.

⁴² Véase <http://www.defesa.gov.br>.

⁴³ Véase <http://www.desenvolvimento.gov.br>.

⁴⁴ “Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción”.

⁴⁵ “Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y sobre su destrucción”.

III. Iniciará los procedimientos administrativos debidos a fin de investigar la realización de posibles actividades que estén prohibidas en relación con los productos delicados;

IV. Presentará, en caso de que existan pruebas de un delito, una copia del procedimiento administrativo a la Oficina del Fiscal Federal a los efectos de emprender la investigación debida;

V. Establecerá sus propios procedimientos de trabajo internos.

La Dirección General de Productos Delicados del Ministerio de Ciencia y Tecnología desempeña una función fundamental en la expedición de licencias de exportación de productos y tecnología de doble uso controlados⁴⁶. Los exportadores envían sus solicitudes de licencia por conducto del sistema de información SISCOMEX, que contiene el historial general de todos los importadores y exportadores brasileños. Al analizar las solicitudes de licencia, las autoridades del Brasil prestan especial atención a las declaraciones sobre uso final y sobre usuario final. Para el examen de cualquier solicitud de exportación de bienes a empresas privadas extranjeras, se tiene sumamente en cuenta el certificado de importación emitido por un organismo gubernamental autorizado del país importador. En dicho documento debe establecerse que la empresa está legalmente autorizada a importar productos delicados y que no los reexportará a un tercer país sin la debida autorización del país importador. En lo que respecta a las ventas a otros Estados, el Gobierno del Brasil exige que los gobiernos de los países que importen productos delicados no los reexporten a un tercer país sin obtener la autorización oficial y que utilicen dichos productos únicamente dentro de sus fronteras.

En el párrafo 3 del artículo 3 de la Ley 9112/95 se extiende la aplicación de las disposiciones al establecerse que “las entidades federales competentes pueden aplicar las disposiciones del presente artículo a otros productos y servicios que no estén incluidos en los rubros I y II [rubros de la Lista de productos delicados y los servicios relacionados con ellos], toda vez que se considere que pueden contribuir en forma parcial o total al desarrollo, la producción o utilización de armas de destrucción en masa, a saber, las armas nucleares, químicas o biológicas, o los sistemas de lanzamiento, en particular los misiles capaces de transportar dichas armas.

Hay otras disposiciones en esferas concretas que incluyen lo siguiente:

i) *Material nuclear*

La Comisión Nacional de Energía Nuclear, establecida en 1956, es el principal órgano brasileño de control de las actividades nucleares y, además, ejerce el monopolio de la extracción, la producción y el comercio de material nuclear. Desde que

⁴⁶ Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 del decreto 4724, de 9 de junio de 2003, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene la responsabilidad de “VII – controlar las exportaciones de productos delicados y los servicios relacionados con ellos”. En el artículo 9 del decreto 4724/03 se dispone que es competencia del Departamento de Asuntos Internacionales, en cuyo ámbito se encuentra la Dirección General de Productos Delicados, “I – prestar apoyo a otras dependencias del Ministerio, las dependencias de investigación y las entidades vinculadas a la realización de actividades relacionadas con la cooperación y la aplicación de los acuerdos internacionales sobre ciencia y tecnología, en particular respecto de los programas espaciales, nucleares y de productos delicados”, y “IV – coordinar el control de la aplicación de los acuerdos internacionales y la autorización de importaciones y exportaciones en el contexto de los programas nucleares y los relacionados con los productos delicados.

ocurrieron los ataques del 11 de septiembre, la Comisión ha establecido medidas adicionales de control y seguridad del acceso y la supervisión de las instalaciones nucleares. En el decreto 2413, de 4 de diciembre de 1997, se establecen las funciones de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, como por ejemplo autorizar las importaciones y exportaciones de los materiales necesarios para producir energía nuclear.

Por lo demás, el Gobierno del Brasil aplica en su totalidad las directrices del documento INFCIRC 225/Rev.4 del Organismo Internacional de Energía Atómica, sobre la protección física del material nuclear y de las instalaciones nucleares.

Desde 1996, la exportación de material nuclear está sujeta a reglamentación conforme a las disposiciones del grupo de suministradores nucleares. En el decreto 1861, de 15 de abril de 1996, se establece un conjunto de reglas para la exportación de productos utilizados con fines nucleares y los servicios directamente relacionados con ellos, con el propósito de evitar la proliferación de las armas nucleares.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, “las exportaciones constituyen transferencias, del territorio del Brasil a cualquier parte fuera de la jurisdicción o del control nacionales, de cualesquiera pieza de equipo, material o tecnología que guarden alguna relación con la Lista de equipo, material y tecnología nucleares y la Lista de equipo y material de doble uso y de la tecnología relacionada con ellos para el sector nuclear, o a los que se haga referencia en dichas listas”.

La Ley 10308/01 contiene disposiciones sobre los depósitos de los desechos nucleares, concretamente con referencia a la selección apropiada de los lugares, la construcción, la expedición de licencias, el uso, la inspección, los costos, las compensaciones, la responsabilidad civil y las garantías. La Comisión Nacional de Energía Nuclear aplica dichas disposiciones⁴⁷.

ii) *Materiales químicos*

En el decreto 2074, de 14 de noviembre de 1996, se establece la Comisión Interministerial de Aplicación de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción, integrada por representantes del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En el Reglamento administrativo (*Portaria*) MCT 704, de 30 de octubre de 2002, figuraba la lista actualizada de los representantes de cada ministerio.

El Senado brasileño está examinando la legislación sobre las sanciones administrativas y penales en caso de producción, desarrollo, almacenamiento, transferencia y uso de armas químicas (PL 2863/97). De acuerdo con esta propuesta, la nueva legislación aplicaría sanciones a los nacionales brasileños que contribuyeran, dentro o fuera del territorio, a la realización de las actividades prohibidas por la Convención sobre las armas químicas.

iii) *Materiales biológicos*

Desde 1976, el Brasil ha sido parte en la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas)

⁴⁷ Para obtener información adicional sobre este tema y acceso a la legislación concreta en portugués, sírvase consultar http://www.met.gov.br/legis/ativ_nucleares.htm.

y tóxicas y sobre su destrucción, cuya aplicación se reglamenta en el decreto 77374, de 1° de abril de 1976. La aplicación de las disposiciones de esta Convención y la supervisión de la utilización del material biológico ha estado a cargo de diversos ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura.

Al respecto, existen otras disposiciones en la Ley 8974/95, que rige lo concerniente a la ingeniería genética y a los organismos vivos modificados, pero también se aplica a los materiales que pueden utilizarse en actividades terroristas.

En 2003 se creó un grupo de trabajo sobre la defensa biológica encargado de evaluar y seguir de cerca la aplicación de medidas preventivas sobre el terrorismo biológico, entre otras cosas (Reglamento administrativo CH/GSI 3, de 24 de julio de 2003).

1.23 El Comité contra el Terrorismo es consciente de que el Brasil puede haber abarcado algunos o todos los puntos que figuran en los párrafos precedentes en los informes o cuestionarios presentados a otras organizaciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las normas internacionales. El Comité agradecería que el Brasil le remitiera una copia de cualquier informe o cuestionario de esa índole como parte de su respuesta, así como los pormenores de todas las actividades que haya llevado a cabo para aplicar las mejores prácticas, los códigos y las normas internacionales pertinentes para el cumplimiento de la resolución 1373 (2001).

El Brasil ha presentado informes a la Organización de los Estados Americanos (OEA) en las reuniones celebradas bajo los auspicios de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados.
